

PONENCIA PARA TERCER DEBATE 224 DE 2011 SENADO, 019 DE 2011 CÁMARA

INFORME DE PONENCIA PARA TERCER DEBATE EN EL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2012
SENADO, 019 DE 2011 CÁMARA por la cual se regula un arancel judicial y se dictan
otras disposiciones.

Senador

BERNARDO MIGUEL ELÍAS VIDAL

Presidente Comisión Tercera

Honorable Senado de la República

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para tercer debate en el honorable Senado de la República del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.

Respetado señor Presidente:

En atención a la designación hecha por la Presidencia de la Comisión Tercera, en mi calidad de ponente me permito presentar para la consideración y tercer debate en la Comisión Tercera del honorable Senado de la República, el correspondiente **Informe de Ponencia** al proyecto de ley de la referencia, previas las siguientes consideraciones.

1. Contenido y alcance del proyecto

El proyecto de ley que se somete a consideración del honorable Senado de la República tiene como finalidad la derogatoria de la actual regulación del arancel judicial prevista en la Ley 1394 de 2010 y en su lugar, expedir una nueva ley que regule esta materia. Con esta iniciativa se pretende hacerle frente a las dificultades que en el orden práctico se han presentado en la aplicación de la Ley 1394 de 2010, con el fin de contribuir al fortalecimiento del procedimiento de recaudo del arancel judicial. El proyecto consta de quince artículos así: el artículo primero regula la gratuidad de la justicia y ratifica dicho principio precisando la posibilidad de establecer, entre otros, aranceles judiciales. En el artículo 2° se define la naturaleza jurídica del arancel judicial como contribución parafiscal. El artículo 3° establece como sujeto activo del arancel judicial al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o la entidad que haga sus veces. El artículo 4° define el hecho generador del arancel judicial. El artículo 5° establece las excepciones al pago del arancel. El artículo 6° establece quién es el sujeto pasivo de la contribución. En el artículo 7° se sientan las bases para el cálculo de la base gravable del arancel judicial. El artículo 8° modifica el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil en relación con el juramento estimatorio. El artículo 9° establece la tarifa del arancel judicial en el dos por ciento (2%) de la base gravable. El artículo 10 regula la forma como debe realizarse el pago del gravamen. El artículo 11 establece como falta disciplinaria la tramitación de los procesos en los que no se cause el arancel. El artículo 12 define

cuál debe ser la destinación de los recursos obtenidos como consecuencia del recaudo del arancel judicial. El artículo 13 establece la forma como se le hará seguimiento al recaudo y destinación de los recursos obtenidos del arancel judicial. El artículo 14 define el régimen de transición aplicable a las demandas presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y el artículo 15 señala el momento a partir de la cual empieza a regir la ley, así como las derogatorias. El texto del proyecto aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes es el siguiente:

¿por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Gratuidad de la justicia. La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica. El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la Administración de Justicia.

Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Parágrafo. La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno Nacional para la justicia no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por concepto de arancel.

Artículo 3°. Sujeto activo. El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la Rama Judicial.

Artículo 4°. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones de la presente ley.

Artículo 5°. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público.

Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos (CISA), cuando este intervenga como titular en procesos judiciales.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.

En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 acreditarán su condición con el respectivo carné.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 con amparo de pobreza.

Parágrafo 1º. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo 2º. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 6º. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención en procesos cuyas pretensiones recaigan sobre obligaciones de contenido dinerario. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del ad excludendum, y de todo aquel que ejerza una pretensión de contenido dinerario.

El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.

El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1º del artículo 5º de la presente ley.

Artículo 7º. Base gravable. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda.

Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.

Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberán liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.

Artículo 8º. Adiciónense dos incisos finales y un párrafo al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor:

¿El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. La suma expresada deberá ser siempre entendida como el máximo pretendido. Quedan proscritas todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

La sanción y la limitación previstas en este artículo no se aplicarán a la cuantificación de los daños inmateriales que deba ser realizada discrecionalmente por el juez, siempre que se incorpore en la reclamación el valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda¿.

Parágrafo. Lo previsto en este artículo aplica para todas las jurisdicciones.

Artículo 9º. Tarifa. La tarifa del arancel judicial es del dos por ciento (2%) de la base gravable.

Artículo 10. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley serán consideradas créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.

Artículo 11. Falta disciplinaria. Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.

Artículo 12. Destinación, vigencia y recaudo. Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través del sistema financiero.

Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se destinará hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, en enero de cada año, informará a la Mesa permanente de concertación indígena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.

Artículo 13. Seguimiento. Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la administración de justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales.

Artículo 14. Régimen de transición. El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

2. Informe de trámite del proyecto

El proyecto de ley hizo curso en la Cámara de Representantes y se encuentra pendiente del tercer debate ante la Comisión Tercera de Senado de la República. Su autor es el Gobierno Nacional - Ministerio de Justicia y del Derecho y es ponente para tercer debate en el Senado, el suscrito Senador Gabriel Zapata Correa.

3. Justificación de la ponencia

Como fue reconocido y ampliamente ilustrado por el Gobierno Nacional durante el tránsito del proyecto en la honorable Cámara de Representantes, la Administración de Justicia sufre de males enraizados, que la mantienen atrasada y congestionada. También se le da la razón al Ejecutivo en el sentido de que la solución de los problemas de la justicia demanda recursos financieros superiores a los que la escasez de los ingresos públicos permite asignarle a la Rama Judicial.

El Gobierno ha venido realizando esfuerzos presupuestales significativos para mejorar los diversos aspectos que tocan con la Administración de Justicia. Pero las necesidades siempre crecientes de esta no permiten hacerles frente en forma adecuada. Por esta razón, considero de significativa importancia la regulación de un arancel judicial que efectivamente, a diferencia de la figura aprobada en la Ley 1394 de 2010, permita generar recursos con los cuales se puede atender razonablemente tales necesidades.

Como ponente coincido con la posición del Gobierno Nacional manifestada en la exposición de motivos del proyecto de ley, en cuanto a la necesidad de reformar el

régimen actual del arancel judicial. En efecto, a pesar de las buenas intenciones con las que el Congreso de la República aprobó la Ley 1394 de 2010, la realidad ha demostrado que la forma como se concibió el hecho generador del arancel judicial, supeditado al efectivo recaudo de las condenas económicas por parte del demandante, ha conllevado a grandes dificultades y frustraciones en el efectivo recaudo del gravamen.

Así las cosas, el proyecto de ley plantea una reforma estructural consistente en rediseñar el hecho generador del arancel judicial, de forma tal que el demandante proceda a su pago al inicio del proceso, sujeto a un futuro reconocimiento por parte del juez al momento de liquidar las costas del proceso, en caso de resultar vencedor dentro del mismo.

De este modo, se superan los inconvenientes que se advirtieron en la vigencia de la Ley 1394 de 2010, principalmente, los señalados en la exposición de motivos del proyecto de ley, a saber:

¿ La situación vigente implica que solo se puede cobrar el arancel cuando haya un recaudo de los dineros en litigio por parte del demandante sin tener en cuenta que el aparato judicial se desgastó de la misma manera con o sin recaudo. Esta situación se subsana en la medida en que el arancel se recauda anticipadamente, de manera que se compensa dicho desgaste con independencia del resultado del proceso.

¿ En la actualidad, quien temerariamente demanda ante la justicia no paga arancel en la medida en que sus pretensiones no tienen fundamento y por lo tanto no hay lugar a recaudo proveniente de las sumas demandadas, aunque sí se genera un desgaste del aparato judicial. Al pagarse anticipadamente el arancel, esta situación tiende a corregirse con un beneficio enorme de desestimular este tipo de actuaciones.

¿ La regulación vigente implica que quien está asistido de la razón y por tanto obtiene la prosperidad de sus pretensiones y recaudo de lo cobrado, sea quien tenga que pagar el arancel, lo cual no es razonable ya que el arancel judicial debe tenerse como una costa procesal más, a cargo de quien estuvo desprovisto de la razón y perdió el litigio. El proyecto pretende corregir la inequidad que opera en la actual Ley 1394 de 2010, en la medida en que si bien el arancel lo paga inicialmente el demandante lo puede recobrar en forma de costas al final del proceso, en el evento en que haya recuperación.

¿ La norma actual permite que en caso de que el demandante no pague o pague parcialmente la contribución se genere una carga operativa adicional para la Administración de Justicia, pues, aquella, en aras de obtener el arancel judicial, deberá perseguir al evasor en un nuevo y engorroso proceso.

Ahora bien, en este contexto resulta importante e ineludible hacer mención del principio de gratuidad de la justicia, entendido como una garantía para que el derecho de acceso a la Administración de Justicia no se vea menoscabado por barreras económicas, imposibles de remover por las personas económicamente más débiles de la sociedad y que desdirían del carácter de Estado Social de Derecho que se consagró en la Constitución.

El ideal de la justicia gratuita que nació vinculado a formas históricas del Estado en las que este, por virtud de las teorías políticas reinantes, cumplía funciones mínimas en una perspectiva de contención de la actuación del mismo, se aleja de la realidad cada día más. El esquema en donde la justicia era una función pública con cometidos puntuales y reducidos, que le permitían al Estado asumir, sin ningún tipo de inconvenientes financieros, la prestación gratuita de los servicios de justicia ya no existe más.

Hoy en día, en la situación de las sociedades complejas actuales, la realidad muestra que ¿la jurisdicción es un recurso escaso¿, que ¿las plazas de juez no son multiplicables a voluntad y que por toda una serie de razones no cabe sin más crear nuevos tribunales o salas¿.

En relación con la gratuidad y la constitucionalidad del establecimiento del arancel, la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-643 de 2011, señalando que ¿no cabe duda, que el nuevo arancel reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el artículo 1º y que contrario a lo que sostienen los demandantes, no resulta por sí mismo contrario a los principios de gratuidad y de acceso a la Administración de Justicia, en la medida que se inscribe dentro del margen de excepciones a la aplicación de la gratuidad en la justicia, que no es un principio absoluto. Sobre esta base, el legislador, dentro de un amplio margen de configuración (artículos 150, numerales 11 y 12 y 338 C. P.), se encuentra facultado para imponer válidamente restricciones al principio de gratuidad de la justicia, en este caso, por vía de implementación del arancel judicial, siempre que en su reglamentación no se violen los principios constitucionales¿.

Como ponente del proyecto en la Comisión Tercera del honorable Senado de la República, no tengo duda acerca de la constitucionalidad del proyecto; sin embargo, considero necesario modular el principio de gratuidad que se hace con la iniciativa y reconocer el derecho a un trato equitativo que merecen los particulares, por lo que pondré a consideración de esta Célula Legislativa modificaciones a la forma en que debe realizarse el pago del gravamen y las excepciones a la aplicación del mismo, a fin de no afectar más allá de lo razonable a quienes cuentan con el derecho de acudir al aparato jurisdiccional en busca de una definición a sus problemas.

4. Modificaciones que se proponen

Al examinar el texto aprobado por la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes y teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, se concluye que es necesario hacer modificaciones. En este sentido explicaré las modificaciones introducidas al texto del proyecto de ley, con miras al tercer debate parlamentario.

En primer lugar, debo manifestar que cualquier regulación que se proponga en esta materia debe ser clara y con límites precisos a fin de armonizarla con las reglas que sobre administración y acceso a la justicia establece la Constitución Política, en especial si el objetivo es modular el concepto de gratuidad en el acceso a la justicia, así como la equidad en la aplicación del gravamen. En mi concepto, el proyecto presenta dos

aspectos de fondo que deben ser precisados mediante un ajuste para evitar discusiones en cuanto a su alcance, contenido e incluso constitucionalidad.

4.1 Pago del arancel judicial

Uno de los temas del proyecto que merece un especial análisis es el atinente al monto del gravamen, en este caso del dos por ciento (2%) de la base gravable. Este monto se toma de la Ley 1394 de 2010 y tiene como justificación el hecho de que el servicio de administración de justicia demanda hoy unas inversiones cuantiosas tanto en gastos de inversión como de funcionamiento con miras a superar los retrasos en esta materia. Como fue revisado minuciosamente en los primeros debates de este proyecto, la actual congestión de la administración de justicia exige medidas de fondo, el replanteamiento de las estructuras procesales añejas, pero así mismo demanda una inversión importante, en especial para instrumentar la oralidad como fórmula para el manejo de los procesos.

La insuficiencia de recursos en esta materia por parte del Estado es evidente. Si bien por vía presupuestal se han venido aumentando los porcentajes a asignar a la rama judicial, tales recursos son insuficientes para el reto que el Estado colombiano tiene al frente. En este sentido, la propuesta del arancel encuentra una justificación en el deber de solidaridad que a todos nos asiste frente a los demás e incluso frente al mismo Estado.

El monto del dos por ciento (2%) se torna en principio sensato y en modo alguno confiscatorio o lesionador de los derechos patrimoniales de los demandantes beneficiados con una condena, además de que fue avalado por la Corte Constitucional. Sin embargo, por la forma como se concibió el arancel en la Ley 1394 de 2010, el recaudo sólo ascendió a trescientos cincuenta millones de pesos, cuando la expectativa era lograr un recaudo de trescientos mil millones anuales. Por esta razón, si bien el recaudo debe cumplir la función de servir como un apoyo financiero cierto y efectivo de la actividad jurisdiccional, también es necesario estimular que el desarrollo de esa actividad se realice con la debida diligencia. En ese sentido, me permito proponer a la honorable Comisión Tercera que el pago del arancel se divida en dos partes: un 1% a la presentación de la demanda y un 1% contra el valor efectivamente recuperado. Este esquema permitirá generar el mayor recaudo esperado por el Gobierno Nacional, así como la medición de la efectividad del aparato jurisdiccional.

En este orden me permito proponer la siguiente redacción del artículo 9º del proyecto:

Texto aprobado en segundo debate	Modificación propuesta para tercer debate
Artículo 9º. Tarifa. La tarifa del arancel judicial es del dos por ciento (2%) de la base gravable.	Artículo 9º. Tarifa. La tarifa del arancel judicial será del dos por ciento (2%) de la base gravable, la cual se pagará así: 1. El uno por ciento (1%) liquidado al momento de presentar la demanda. 2. El uno por ciento (1%) liquidado sobre el pago que se produzca a la terminación

	del proceso.
--	--------------

4.2 Excepciones al pago del arancel judicial

Uno de los aspectos que mayor cuidado exige la construcción legislativa, es la determinación de los sujetos gravados con el arancel. Dicha definición deriva del derecho de acceso a la administración de justicia, así como de los derechos a un trato igualitario en el trámite y atención de los procesos, y de solidaridad.

En este sentido considero que es necesario mantener el equilibrio entre el deber de los particulares de contribuir al gasto de funcionamiento e inversión de una de las Ramas del Poder Público como lo es la Jurisdiccional, y el propósito que cumplen ciertas entidades que si bien responden a una naturaleza pública, su gestión necesariamente compromete en gran medida el desgaste del aparato judicial en los mismos términos de cualquier persona obligada al pago del arancel. En relación con este aspecto la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, señala que «la aplicación y o peratividad de la justicia se hace efectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad». Valga anotar, esas condiciones de igualdad no se predicen únicamente de las oportunidades para acceder a la administración de justicia, sino también de las condiciones mismas en que se accede. Y en este punto juega un papel preponderante la naturaleza jurídica de las partes, la cual, como señala la sentencia citada, «no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación».

En este orden, considero que si bien debe mantenerse como excepción el no cobro del arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, atendiendo los principios de igualdad y solidaridad en las cargas públicas «mantenimiento del aparato jurisdiccional», es necesario que se incorporen como sujetos pasivos del arancel judicial todas las entidades públicas que pertenezcan al sector financiero o sean vigiladas por la Superintendencia respectiva, sin importar su naturaleza jurídica, así como todo tipo de colector de activos públicos señalados como tal por la ley. Dicho aspecto se justifica en la medida en que si bien se trata de entidades estatales, el desgaste del aparato jurisdiccional se da en las mismas condiciones que en el caso de los particulares, lo cual justifica que se les aplique el gravamen.

Me permito proponer la siguiente redacción del artículo 9º del proyecto:

Texto aprobado en segundo debate	Modificación propuesta para tercer debate
Artículo 5º. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás	Artículo 5º. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás

Texto aprobado en segundo debate	Modificación propuesta para tercer debate
<p>acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público.</p> <p>Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos (CISA), cuando este intervenga como titular en procesos judiciales.</p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.</p> <p>En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén ,1 2y 3 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia.</p>	<p>acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las entidades públicas que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley.</p> <p>Tampoco podrá cobrarse el arancel de que trata la presente ley al Colector de Activos Públicos (CISA), cuando este intervenga como titular en procesos judiciales.</p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.</p> <p>En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén ,1 2y 3 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia.</p>
<p>El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 2 ,1 y 3 acreditarán su condición con el respectivo carné.</p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 2 ,1 y 3 con amparo de pobreza.</p> <p>Parágrafo 1º. Quien utilice información o</p>	<p>El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 2 ,1 y 3 acreditarán su condición con el respectivo carné.</p> <p>En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 2 ,1 y 3 con amparo de pobreza.</p> <p>Parágrafo 1º. Quien utilice información o</p>

Texto aprobado en segundo debate	Modificación propuesta para tercer debate
<p>documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.</p> <p>Parágrafo 2º. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.</p>	<p>documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.</p> <p>Parágrafo 2º. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.</p>

Finalmente se realiza un ajuste de forma en los artículos 10, 12 y 13 del proyecto de ley, en el sentido de establecer la entidad que pueda llegar a hacer las veces del Consejo Superior de la Judicatura en el evento en que esta entidad sea modificada o eliminada.

De los honorables Congresistas,

Gabriel Zapata Correa,
Ponente.

5. MODIFICACIONES PROPUESTAS AL ARTICULADO

En mi calidad de ponente para tercer debate del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones, me permito proponer las siguientes modificaciones en el texto del articulado:

¿ El artículo 5º del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, quedará así:

¿Artículo 5º. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las entidades públicas que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de

que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.

En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 acreditarán su condición con el respectivo carné.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 con amparo de pobreza.

Parágrafo 1º. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo 2º. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

El artículo 5º del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, quedará así:

¿Artículo 9º. Tarifa. La tarifa del arancel judicial será del dos por ciento (2%) de la base gravable, la cual se pagará así:

1. El uno por ciento (1%) liquidado al momento de presentar la demanda.
2. El uno por ciento (1%) liquidado sobre el pago que se produzca a la terminación del proceso.

El artículo 10 del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, quedará así:

¿Artículo 10. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, o la entidad que haga sus veces.

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley serán consideradas créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.

¿ El artículo 12 del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, quedará así:

¿Artículo 12. Destinación, vigencia y recaudo. Destínense los recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través del sistema financiero.

Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se destinará hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, en enero de cada año, informará a la Mesa permanente de concertación indígena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial.

¿ El artículo 13 del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, quedará así:

¿Artículo 13. Seguimiento. Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la administración de justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales.

Proposición

Por las razones expuestas me permito rendir **ponencia favorable** y en consecuencia solicito a los honorables miembros de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República **dar tercer debate** al Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones, **con las modificaciones propuestas.**

De los honorables Congresistas,

Gabriel Zapata Correa,
Ponente.

TEXTO PROPUESTO PARA TERCER DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 224 DE 2012 SENADO, 019 DE 2011 CÁMARA

por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Gratuidad de la justicia. La Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica. El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la Administración de Justicia.

Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.

Parágrafo. La partida presupuestal que anualmente asigna el Gobierno Nacional para la justicia no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pretexto de la existencia de los recursos recaudados por concepto de arancel.

Artículo 3°. Sujeto activo. El arancel judicial se causa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la Rama Judicial.

Artículo 4°. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones de la presente ley.

Artículo 5°. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la acción de tutela y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las entidades públicas que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandante sea un particular, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con las reglas generales previstas en la presente ley. Sin embargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial.

En los casos en que el demandante sea una persona natural de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 o con amparo de pobreza, el pago del arancel judicial estará a cargo del demandado vencido en el proceso. En este caso, la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la demanda reconocerá tal condición, si a ello hubiere lugar. Las personas pertenecientes a los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 acreditarán su condición con el respectivo carné.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral, cuando el demandado sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas de los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 con amparo de pobreza.

Parágrafo 1º. Quien utilice información o documentación falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones previstas en el presente artículo, deberá cancelar, a título de sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sanciones penales que hubiere lugar.

Parágrafo 2º. En las sucesiones procesales en las que el causante hubiere estado exceptuado del pago del arancel judicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabiente, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 6º. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante ante inicial o del demandante en reconvencción en procesos cuyas pretensiones recaigan sobre obligaciones de contenido dinerario. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del ad excludendum, y de todo aquel que ejerza una pretensión de contenido dinerario.

El accionante al momento de presentar su demanda deberá cancelar el arancel judicial y deberá anexar a su demanda el correspondiente comprobante de pago. En caso de no pagar, no acreditar su pago o hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

El juez estará obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el auto admisorio de la demanda.

El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1º del artículo 5º de la presente ley.

Artículo 7º. Base gravable. El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la demanda.

Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la demanda.

Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, deberán liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de presentación de la demanda.

Artículo 8º. Adiciónense dos incisos finales y un parágrafo al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor:

¿El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. La suma expresada deberá ser siempre entendida como el máximo pretendido. Quedan proscritas todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

La sanción y la limitación previstas en este artículo no se aplicarán a la cuantificación de los daños inmateriales que deba ser realizada discrecionalmente por el juez, siempre que se incorpore en la reclamación el valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda¿.

Parágrafo. Lo previsto en este artículo aplica para todas las jurisdicciones.

Artículo 9°. Tarifa. La tarifa del arancel judicial será del dos por ciento (2%) de la base gravable, la cual se pagará así:

1. El uno por ciento (1%) liquidado al momento de presentar la demanda.
2. El uno por ciento (1%) liquidado sobre el pago que se produzca a la terminación del proceso .

Artículo 10. Pago. Toda suma a pagar por concepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, -Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, o la entidad que haga sus veces.

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del arancel judicial presta mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto del arancel judicial a que se refiere esta ley serán consideradas créditos de primera clase, en los términos del artículo 2495 del Código Civil.

Artículo 11. Falta disciplinaria. Todos los procesos deberán recibir un mismo trato en cuanto a su trámite e impulso. Constituye falta disciplinaria gravísima del juez, retrasar, sin justificación, la tramitación de los procesos en los que no se causa arancel.

¿**Artículo 12. Destinación, vigencia y recaudo.** Destínense lo s recursos recaudados por concepto de arancel judicial de que trata la presente ley para la descongestión de los despachos judiciales y la implementación del sistema oral a nivel nacional. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, tendrá la facultad de administrar, gestionar y recaudar el mismo, sin perjuicio de que el recaudo se realice a través del sistema financiero.

Parágrafo. De los recursos del arancel judicial se destinará hasta el diez por ciento (10%) para la jurisdicción especial indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, en enero de cada año, informará a la Mesa permanente de concertación indígena el valor total recaudado por concepto de arancel judicial¿.

Artículo 13. Seguimiento. Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo Superior de la Judicatura, o la entidad que haga sus veces, deberá rendir un informe al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de las sumas recaudadas por concepto de arancel judicial, su destino y el empleo en programas de descongestión de la administración de justicia, e implementación de la oralidad en los procedimientos judiciales.

Artículo 14. Régimen de transición. El Arancel Judicial de que trata la presente ley se generará a partir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas demandas se presenten con posterioridad a la vigencia de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, se registrarán por las disposiciones previstas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del arancel judicial en los términos allí previstos.

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 1394 de 2010, así como todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Senadores,

Gabriel Zapata Correa,
Ponente.

Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2012

En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto para primer debate del Proyecto de ley número 224 de 2012 Senado, 019 de 2011 Cámara, por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones.

El Secretario General,

Rafael Oyola Ordosgoitia.

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia y texto propuesto para primer debate, consta de veinte (20) folios.

El Secretario General,

Rafael Oyola Ordosgoitia.

1[1][1] Corte Constitucional, Sentencia SU-157 de 1999.

2[2][2] Marulanda B., Paredes M. y Fajury Lizbeth, ¿Acceso a servicios financieros en Colombia: retos para el siguiente cuatrienio?, en Colombia 2010-2014: Propuestas de Política Pública, CAF ¿ Fedesarrollo, julio 2010.
